



[Aragón a las urnas: la factura de la inestabilidad política tras el fracaso presupuestario de Azcón](#)

AEC
10/02/2026

Más de un millón de ciudadanos aragoneses se ven obligados a acudir nuevamente a las urnas este domingo, en las primeras elecciones autonómicas en solitario y anticipadas de la historia de la comunidad. Lejos de ser un ejercicio de normalidad democrática, esta convocatoria es el resultado directo de un fracaso político: la incapacidad del Gobierno del popular Jorge Azcón para alcanzar un acuerdo presupuestario con sus socios de Vox.



El Origen del Adelanto: Un Presupuesto Fallido

Los hechos son claros. Apenas dos años y medio después de los comicios de mayo de 2023, el presidente Jorge Azcón disolvió las Cortes y convocó elecciones. La razón esgrimida fue la imposibilidad de sacar adelante las cuentas públicas, un pilar fundamental para la acción de cualquier gobierno. Este bloqueo evidencia la fragilidad de los pactos políticos y traslada la responsabilidad de la falta de consenso directamente a los ciudadanos, quienes deben volver a votar por la parálisis de sus representantes.

Mientras el Gobierno de Aragón se limita a informar sobre los detalles logísticos de la jornada –apertura de 997 centros de votación y constitución de 2.213 mesas electorales–, el trasfondo revela una gestión incapaz de garantizar la estabilidad necesaria para agotar una legislatura. La convocatoria electoral se convierte así en un recurso extremo ante la falta de negociación, una herramienta que, si bien legal, denota una debilidad parlamentaria significativa.

Apunte Jurídico: El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 40, otorga al Presidente la facultad de disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas. Sin embargo, esta prerrogativa no es absoluta. No puede ejercerse, por ejemplo, durante el primer período de sesiones de la legislatura, cuando esté en trámite una moción de censura o antes de que transcurra un año desde la anterior disolución. Aunque el adelanto de Azcón cumple con la legalidad formal, el uso de esta potestad para resolver una crisis de gobernabilidad interna plantea un debate sobre su idoneidad y el coste institucional que supone para la autonomía.

El Coste de la Incertidumbre para los Aragoneses

La celebración de elecciones no es un acto inocuo. Implica un considerable gasto público, la paralización de la actividad legislativa y administrativa ordinaria y la prolongación de un

clima de incertidumbre que afecta tanto a las inversiones como a la gestión de los servicios públicos. Los ciudadanos de los 731 municipios aragoneses no solo eligen a sus 67 representantes, sino que también asumen las consecuencias de una decisión política que interrumpe el mandato que ellos mismos otorgaron en las urnas hace menos de tres años.

En definitiva, la jornada electoral de hoy en Aragón no es una fiesta de la democracia, sino el síntoma de una fractura política que ha sido incapaz de resolverse en el parlamento. Los votantes tienen ahora la palabra para decidir si revalidan su confianza en los mismos actores que no lograron un acuerdo o si optan por un nuevo escenario que devuelva la estabilidad a la comunidad.

